



DECLARACIÓN

XIII CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO "LUIS IGUINI"

En el marco de la peor pandemia que la humanidad ha atravesado en el último siglo, la CLATE realiza su XIII Congreso Ordinario y Extraordinario "Luis Iguini", en homenaje a quien fuera uno de los fundadores de esta cincuentenaria experiencia de coordinación sindical latinoamericana y caribeña. Este contexto no es gratuito para nuestra Confederación y nos obliga, por primera vez, a llevar a cabo nuestra máxima instancia orgánica en un marco virtual, a través de video conferencia y a distancia.

La pandemia puso a prueba al mundo entero. En todas partes del planeta el sistema capitalista mostró su ineficacia para resolver las necesidades de la humanidad. Al mismo tiempo dejó al descubierto la peor cara del sistema mundial, poniendo en primer plano la desigualdad de acceso a las vacunas y tecnologías médicas necesarias para salvar vidas. Esto fue denunciado desde el seno de la Naciones Unidas, cuyo secretario general declaró que un reducido número de 10 naciones acapararon el 75% de las vacunas y fármacos para combatir el Covid-19. Se trata de un conflicto dramático, el cual tiene como telón de fondo el abusivo sistema de patentes medicinales, que favorece los intereses de los laboratorios y corporaciones farmacéuticas mundiales con la excusa de proteger la propiedad intelectual.

La pandemia de la COVID 19 es también la otra cara de una crisis sanitaria ligada a la crisis ambiental y del sistema. El origen de los súper patógenos está directamente relacionado con la destrucción de los ecosistemas históricamente conservados por los pueblos campesinos y originarios. Todo indica que, si este modo de producción continúa, tendremos innumerables nuevos virus, que se transformarán en nuevas pandemias.

Quienes insisten en este camino se muestran ciegos ante la realidad o decididamente la niegan, a pesar de la abundante evidencia científica disponible. Y al negacionismo hay que darle batalla porque produce efectos devastadores. Así como negar el Cambio Climático e insistir en prácticas destructivas de la naturaleza está poniendo contra las cuerdas al planeta, haber negado los efectos devastadores de la pandemia de Covid 19 ha incrementado el número de muertes evitables. Basta mencionar el triste ejemplo de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha sometido a su pueblo a un verdadero genocidio al ignorar la evidencia científica sobre la pandemia, desalentar las medidas de cuidado, minimizar los riesgos de la enfermedad e incluso, poner en duda la eficacia de las vacunas y recomendar tratamientos ineficaces.

Pero el flagelo de esta enfermedad, que produjo más de 4 millones y medio de muertes a nivel mundial, también mostró la solidaridad y el compromiso de millones de trabajadoras y trabajadores de la salud, que combatieron la pandemia en la primera línea de batalla. Asimismo dejó en evidencia cómo la intervención del Estado es la única herramienta que puede dar respuesta a los problemas de la magnitud y profundidad que planteó el Covid-19.

Fue desde el Estado que se adquirieron y distribuyeron las vacunas que se aplicaron y se aplican en nuestros países. Fue desde el Estado, con mayor suerte en los países donde el sector público cuenta con más recursos, que se pudo hacer frente a la masiva necesidad de atención médica que los sistemas privados de salud no pudieron satisfacer. Fue desde la inversión acumulada durante años por los Estados, a través de la asignación de fondos públicos a la investigación de tratamientos y



desarrollo de vacunas, que se pudo avanzar sin precedentes y en tiempo récord en estrategias para enfrentar la pandemia.

Sin embargo este Estado, que fue revalorizado por su rol sanitario y por la demanda de apoyo para enfrentar la crisis económica y social que la pandemia agravó, no es el Estado que queremos. Es un Estado endeudado y estructurado para favorecer los intereses del capital concentrado. Un Estado que no abandona el modelo neoliberal y que alimenta la inserción de nuestros países en la división internacional del trabajo en un rol de exportadores de materias primas. Para eso se profundiza el camino fallido de los tratados de libre comercio, de los que poco se habla pero a los cuales se adhiere en las sombras, sin prisa pero sin pausa, haciendo caso omiso al rechazo que nuestros pueblos marcaron cuando dijeron no al ALCA en 2005.

Hoy no hay margen para un régimen neo colonial como el que el capital trasnacional nos propone. No hay margen porque, en el actual contexto de Cambio Climático y de destrucción ambiental que producen las actividades extractivas, la naturaleza nos está diciendo basta. Nos dice basta desde la cordillera a la selva. Dicen basta Los Andes y dice basta la Amazonía. Y sobre todo, dicen basta los pueblos que desde hace cientos de años aprendieron a vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra.

Por lo tanto se requiere una lucha frontal contra del modelo capitalista-neoliberal para la defensa del medioambiente. Del mismo modo se necesitan medidas drásticas para detener ahora el calentamiento global, para que a fines del siglo 21 este no sea mayor de 2°C por encima de la temperatura promedio global preindustrial. Debemos ser claros: la lucha es por cambiar el sistema y no el clima.

Tampoco hay margen para un Estado mínimo y para una economía cuyas promesas de progreso se limitan al supuesto bienestar que podría traer el crecimiento basado en la exportación de commodities. Nuestras sociedades necesitan un Estado productivo, que impulse la demanda, el empleo y que diseñe presupuestos para implementar políticas públicas que garanticen derechos. “Por favor, gasten. Gasten todo lo que puedan y un poco más”, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva al comenzar este año. Suele decirse que “a confesión de partes, relevo de pruebas”. Sin embargo, este mensaje fue para gobiernos y bancos centrales de países ricos. Para los países latinoamericanos y caribeños, el FMI predica la reducción del déficit fiscal y la obligación de honrar deudas, sin importar su origen fraudulento.

En los países ricos, la receta siempre es distinta. Sin ir más lejos, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, les dijo a los empresarios de su país que paguen mayores salarios a sus empleados. En estas latitudes se insiste con mayor flexibilidad laboral, reducción de beneficios y eliminación de la protección contra el despido arbitrario. Mientras en el mundo se debate la reducción de la jornada laboral y el salario básico universal, en nuestra región las y los trabajadores necesitan dos o tres empleos para sobrevivir, y la negociación colectiva es una utopía incluso en el empleo estatal de muchos países.

Pero las trabajadoras y trabajadores de la región no sólo enfrentan el empleo precario, la falta de negociación colectiva y los bajos salarios. Hoy en día, después de una vida completa de trabajo, millones de latinoamericanos y latinoamericanas en edad de retiro ven negado el derecho a una vejez digna. La existencia de jubilaciones y pensiones por montos inferiores a la línea de pobreza, o la falta de acceso a estos beneficios, es el resultado de la privatización de los sistemas previsionales en manos de la especulación financiera. En muchos países, lejos de revertirse este proceso fallido, se insiste en la privatización de regímenes que continúan bajo la órbita pública. Frente a ello, las y los



estatales reafirmamos nuestra defensa de los sistemas previsionales públicos, solidarios y bajo régimen de reparto.

Este Estado y el estado de cosas en que vivimos deben cambiar. Pero para que cambie el Estado, y mundo sobre el cual le reclamamos que intervenga, es necesario dotarlo de recursos. Necesitamos una reforma fiscal que reformule el sistema tributario para que el que más tiene más pague. La inequidad de los sistemas tributarios ha generado una paradoja. Los más ricos hacen campaña contra los impuestos, cuando son los que menos pagan. Y los pobres, con justa causa debido a que pagan más, terminan por creer que pagar impuestos está mal.

Los impuestos son necesarios para sostener la salud pública, la educación pública, la seguridad ciudadana, los servicios sociales y de cuidado, así como para hacer frente a tantas otras obligaciones estatales. Por ello, debemos dirigir nuestra crítica hacia los impuestos regresivos, hacia la evasión fiscal y la fuga de capitales. Los escándalos de los “Panamá Papers” y “Pandora Papers” sacaron a la luz un problema sistémico. No hay que eliminar impuestos, hay que exigir a los empresarios y gobernantes de primera línea que esconden sus patrimonios en “paraísos” fiscales que los paguen.

Los “paraísos” fiscales son verdaderas guaridas del capital transnacional. Hacia allí deben dirigir su mirada los países ricos si tienen verdadero interés en corregir los desequilibrios que ponen en crisis nuestras sociedades. En América Latina y el Caribe no necesitamos que los EE.UU., ni la OEA, ni el FMI, ni ninguna nación europea audite nuestros problemas, ni se entrometa en nuestros asuntos internos. Tal como lo proclamara la CELAC en 2014, América Latina es una “zona de paz”. Ese status debemos defenderlo ante el injerencismo extranjero, que promueve golpes de Estado (como sucedió recientemente en Bolivia); que amenaza con intervenciones militares (como en Venezuela); o que sostiene desde hace más de 60 años el criminal bloqueo genocida contra Cuba, el cual denunciamos y repudiamos.

Está claro que este mundo debe cambiar, y deber hacerlo urgente. No lo dice el sindicalismo estatal en soledad, lo dicen los pueblos. Lo dijo el pueblo chileno en octubre de 2019 y hoy se apresta a votar una nueva constitución, para alumbrar un nuevo pacto social y plurinacional. Lo dijo el pueblo ecuatoriano ese mismo año y colombiano este año, en procesos que aún siguen abiertos. Lo dijo el pueblo boliviano cuando revirtió el golpe de Estado. Lo dijo el pueblo Argentino cuando rechazó el regreso del modelo neoliberal tutelado por el FMI. También lo dijo el pueblo del Perú, al elegir democráticamente un proyecto nacido de la clase trabajadora y el pueblo, para desmontar la arquitectura de su Estado neoliberal. Y el pueblo y el sindicalismo uruguayo cuando se reunieron 800.000 firmas para tirar abajo la Ley de Urgente Consideración, por ser antipopular y represiva. Y seguirán luchando los pueblos para decir basta.

Tenemos que poner en real perspectiva una visión globalizadora de la importancia de discutir un modelo de Seguridad Social solidaria y sustentable para nuestros compañeros y compañeras. Hay que avanzar en las discusiones y acciones en la protección de la seguridad social en toda América latina y el Caribe.

En ese grito que dice basta se funde la voz de las mujeres, que hoy da impulso a la lucha y la conquista de nuevos derechos. El movimiento de mujeres y feministas sindicalistas, fuente de una arrolladora vitalidad, ha logrado establecer una agenda de demandas que incluye la denuncia y el rechazo de la violencia machista y las estructuras patriarcales en el Estado y la sociedad. Esa agenda incorpora, asimismo, el empoderamiento de millones de compañeras en el reclamo por la igualdad de género y de derechos, la paridad y la equidad en el acceso a oportunidades, y la pelea por conquistar la soberanía y autonomía sobre sus cuerpos. Debemos impulsar la más amplia participación de mujeres y jóvenes en todos los ámbitos.



Las desigualdades y las múltiples violencias contra las mujeres en su diversidad, es intrínseco al modelo económico capitalista. Este se sustenta en el trabajo no reconocido y gratuito de las mujeres, trabajo no remunerado -en especial las actividades dedicadas al cuidado y reproductivas-, que sigue siendo la principal razón por la que las mujeres salen de la fuerza laboral. Durante la pandemia millones de mujeres han aumentado el trabajo en casa, en la calle desde la informalidad y en los barrios y territorios. El confinamiento y/o las cuarentenas en algunos países hicieron más vulnerables a muchas mujeres y menores, quienes fueron obligadas a convivir con sus agresores; lo que aumentó la tasa de femicidios.

Las luchas de hoy encuentran también, como sujeto protagónico, a nuestros pueblos originarios de pie y a la ofensiva. Marginados e invisibilizados durante siglos, obligados a asimilarse a nuestras sociedades resignando identidad y cultura, y condenados a la pobreza por despojo de sus territorios y bienes comunes, hoy también alzan su voz. Desde el pueblo mapuche en Chile y Argentina, hasta la minga indígena colombiana, desde la CONAIE ecuatoriana hasta pueblos de la Amazonía, las comunidades originarias (en especial las mujeres) se han convertido en verdaderas guardianas de los territorios frente a un sistema que busca hacer de América Latina y el Caribe un mero enclave extractivista.

Para el sindicalismo estatal se nos plantean, por lo tanto, grandes desafíos. Sin lugar a dudas, uno de ellos es el de persistir en nuestra defensa ineludible de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sector público. Pero también debemos asumir la disputa por un Estado inclusivo, soberano y rector de una economía que garantice desarrollo sustentable y justicia social. En este camino, asimismo, desde la CLATE deberemos continuar desarrollando y profundizando la política de Derechos Humanos como una prioridad. Porque en definitiva, las y los trabajadores estatales de la región tenemos un destino histórico junto a nuestros pueblos por el establecimiento de una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.

Esa lucha no podemos pensarla solos y solas, debemos asumirla junto al conjunto del movimiento sindical obrero y de los pueblos de nuestra región. En esa articulación política y social debemos concentrar nuestros esfuerzos para los próximos años. Porque estamos convencidos y convencidas que otro mundo es posible y necesario. Depende de nosotras y nosotros hacerlo realidad.

Parar la barbarie capitalista es la tarea central de nuestro tiempo. Necesitamos desterrar la dominación del capital sobre la vida, construir un mundo justo, igualitario y soberano, para que todas y todos podamos vivir dignamente y en paz.